

"Financiadores, con gran responsabilidad en el asesinato de Berta Cáceres: Gustavo Castro",
La Coperacha, México, 04 de marzo de 2021.

Consultado en:

<https://lacoperacha.org.mx/financiadores-con-responsabilidad-en-asesinato-berta-caceres/>

Fecha de consulta: 02/08/2021.



Foto: Ginnette Riquelme/Reuters/Newscom

“Pandemia ha incrementado riesgos contra personas defensoras, debemos cambiar las estrategias”.

El mexicano Gustavo Castro Soto fue sobreviviente del ataque y asesinato contra la ambientalista lenca Berta Cáceres la madrugada del 02 de marzo de 2016 en Intibucá, Honduras. Recibió dos disparos y lo dieron por muerto. Había asistido a un seminario sobre Energías Renovables organizado por el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH).

El pueblo lenca, el COPINH, las mujeres hondureñas y Berta Cáceres, habían resistido y frenado el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca de la empresa Desarrollos Energéticos

Sociedad Anónima (DESA), propiedad de una familia poderosa del país centroamericano, los Atala Zablah, que pretendía explotar y privatizar el agua del río Gualcarque, el agua de todos.

Entrevistado por La Coperacha, Castro Soto señala que, a pesar de no haber llegado la justicia para Berta, su legado integral se reproduce en mujeres, movimientos sociales y pueblos originarios. El también integrante de Otros Mundos Chiapas identifica que además de los responsables directos en el juicio por el asesinato de Berta, también cabría saber qué tan responsables son las financiadoras del megaproyecto y otros actores.

¿Cómo va el proceso judicial por el asesinato de Berta Cáceres?

Se encarcelaron a 8 presuntos autores materiales, de los cuales 7 fueron sentenciados a 30 años por el asesinato de Berta y a 20 años por el asesinato en grado de tentativa contra mi persona. Ahora el proceso gira en torno a David Castillo, uno de los miembros de la mesa directiva de la empresa donde se sentaba junto a la familia Atala, los dueños de la empresa. A él se le dio prisión preventiva hace 3 años y desde entonces no se le ha enjuiciado.

La defensa y la impunidad en Honduras han llevado a que las audiencias se suspendan continuamente. Finalmente se aceptaron las audiencias y el COPINH y la familia de Berta presentaron recientemente 88 pruebas. Al final se aceptó que uno de los hermanos Atala fuera a declarar, y en eso está el juicio.

El gobierno hondureño no solamente ha frenado el proceso, sino que sus acciones han sido ilegales, la persona que está actualmente presa lleva 3 años arraigado, pero legalmente sólo se permite año y medio. Ha habido violaciones al Código Penal, se han tratado de evitar peritajes, testigos, suficientes pruebas, se ha buscado generar un escenario que sea favorable a la impunidad. Estamos hablando de una de las familias más ricas de Honduras, dueña de bancos y súper tiendas, con mucho poder político y económico.

Actualmente hay una presión fuerte por parte del gobierno de Estados Unidos con Joe Biden, donde los Demócratas están promoviendo retirar el apoyo al presidente de Honduras,

caracterizado por represión, impunidad, narcotráfico y corrupción. Eso quizá cambie un poco la impunidad que ha habido hasta ahorita.

¿Independiente del juicio por el asesinato dónde ves más responsables?

Hay un entramado de intereses muy complejo, cada actor o cada interés tiene un papel fundamental en este círculo de impunidad. Por ejemplo, el proyecto no se hubiera podido hacer si no hay financiadores. Primero fue el Banco Mundial y se retiró. Después fue el Banco Holandés de Desarrollo y el Fondo Finlandés para la Cooperación Internacional, quienes sabiendo que había muertos y había represión, no había consulta previa, libre e informada sobre el proyecto, lo seguían financiando.

¿Qué hubiera pasado si no hubieran financiado? Quizás el proyecto hasta ahí hubiera llegado. Y si se han retirado no es por virtud propia, es por la presión internacional sobre el uso de sus fondos que financian megaproyectos como presas, mineras y otras concesiones extractivas. Estos bancos tienen muchísima responsabilidad. Pero de igual manera el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) donde México y varios países son parte, mantienen el financiamiento y los intereses en este proyecto.

Otro actor son la misma familia Atala, la empresa, no solamente por la deuda que tiene y los préstamos que ha recibido, sino porque tiene interés de la apropiación del territorio y del negocio de la venta de energía. El otro actor es el gobierno que mantiene en tal impunidad a un sector oligarca y de ahí todo el entramado institucional como es el Ejército, la Policía, haciendo comparsa de grandes transnacionales y oligarcas. Todos tienen mucha responsabilidad.



Gustavo Castro y Berta Cáceres hace 20 años. Foto cortesía Otros Mundos Chiapas

¿Cuáles son las enseñanzas que deja Berta a los movimientos sociales, a las mujeres y a los pueblos originarios?

Es un legado muy integral. Berta vio nacer al COPINH pero también éste fue formando a Berta. Dentro de la estrategia que ella planteaba, estaba la apropiación de un sistema de comunicación, de formación política, de solidaridad con las organizaciones y los movimientos sociales no solamente de Honduras sino de América Latina, la movilización con distintos temas políticos y económicos porque se movilizaban en torno a la deuda externa, Tratado de Libre Comercio, Plan Puebla Panamá, represas, minería, extractivismo, racismo, patriarcado.

Yo creo que ese es el legado que dejan Berta y el COPINH, que la lucha es integral. No es monotemática, no es sólo local. Incluso reivindicando la lucha por la diversidad sexual y del movimiento LGBTTI.

¿Cómo miras el panorama actual con los megaproyectos y la pandemia en los territorios?

Muchos gobiernos de la región, no solamente Honduras, están entrando en un

cuestionamiento muy fuerte y evidenciándose sobre a quién salvar. Los países y los gobiernos han rescatado nuevamente a grandes empresas, grandes transnacionales. Pero además, si antes había un sistema de corrupción impresionante, ahora, con la inyección de recursos, cuanto más.

También es un momento en que los movimientos sociales tenemos que buscar alternativas. Tiene que ser un momento para reflexionar cuál debe ser el camino de las resistencias. Tenemos que ser autónomos en nuestras propias regiones, producir los alimentos, producir la energía, empezar a generar recursos propios y no depender tanto. Con la pandemia se vio claro que las comunidades que sobrevivieron a la crisis fueron las que podían sembrar, que tenían producción, que tenían medicina tradicional. Tenemos el reto de preparar nuevas estrategias y alternativas.

¿Las personas defensoras continúan con el mismo nivel de riesgo ahora en la pandemia?

Se ha incrementado el riesgo. Ya era de por sí un riesgo oponerse a las grandes inversiones extractivistas que implican muchos intereses económicos en apropiación de territorios, recursos, agua, energía. Era un riesgo oponerse a la infraestructura, megaproyectos e invasión del capital. Ahora se intensifica porque muchos de estos megaproyectos son declarados como indispensables.

En cuanto a la seguridad de las personas defensoras debemos modificar las estrategias, no podemos realizar las mismas acciones que antes. Muchas acciones están criminalizadas en el marco de la modificación de las leyes y códigos penales. Hoy puede ser declarado como crimen organizado o secuestro el hecho de que una comunidad bloquee un camino para defender su tierra o su agua.

La seguridad debe ser personal, familiar y colectiva, se deben generar mecanismos y protocolos de seguridad comunitarias, eso es fundamental. Pedirle al gobierno que nos garantice la seguridad cuando es quien impulsa aquello que tenemos en contra, puede ser un mecanismo mediático, pero no la garantiza. Se deben buscar mecanismos comunitarios de protección.